

En la educación institucionalizada se reflejan los caracteres de la estructura social y las políticas que el poder asume respecto de la sociedad en que funciona. Dicha educación, por lo tanto, se caracteriza por la multiplicidad de funciones que cumple en relación a los distintos sub-sistemas sociales. De ello se deduce que no sea asimilable a una organización con fines inequívocos sujetos a una racionalidad formal de medios, sino que por el contrario, sea un ejemplo de organización sujeta a una racionalidad material dependiente de los valores prioritarios de los grupos de poder que dirigen la sociedad.

Así, las funciones predominantes del sistema educativo son:

a) Socialización en los valores y consecuente internalización de las actitudes y motivaciones culturales compatibles con el sistema social;

b) Auto-perpetuación del sistema político mediante la internalización de los valores cívicos del sistema y logro de identificación con el mismo por parte del educando;

c) Reclutamiento de los individuos para ocupar las posiciones jerárquicas de la sociedad según las formas compatibles con la configuración de clase y poder vigentes;

d) Desarrollo de las capacidades y conocimientos instrumentales necesarios para el desempeño de los distintos roles sociales, y especialmente para la ocupación de posiciones en el sub-sistema económico.

Según las sociedades y según su ubicación en cuanto desarrollo y sistema social unas funciones tienen más prioridad que otras pero en ningún caso una función puede asumir el carácter de exclusiva en la educación institucionalizada. En las sociedades desarrolladas se les da un mayor énfasis a las funciones instrumentales, a consecuencia de las exigencias operativas de un sub-sistema económico tecnológicamente avanzado, mientras que en las sociedades no desarrolladas la menor demanda cualitativa de aquél jerarquiza la función de la educación en relación al reclutamiento para la estructura de clase y poder.

El grado de desarrollo económico establece ciertos parámetros en cuanto a la posibilidad de un sistema educativo universal o cerrado, tanto por las demandas de mano de obra como por la capacidad de financiación de la educación. Sin embargo, no se puede establecer una correlación rígida entre desarrollo económico y extensión del sistema educativo porque según la participación de las clases sociales en el poder y de acuerdo al tipo de ideologías expresables en una política social, la

educación puede tener un carácter más abierto que el resultante de las demandas de mano de obra del subsistema económico. En este caso la voluntad de favorecer la integración nacional y el reclutamiento de las distintas posiciones por métodos que combinan herencia y movilidad sociales, se transforman en valores prioritarios incluso al precio de tasas menores de inversión en infra-estructura económica.

La pluralidad de funciones del sistema educativo explica que en él se expresen la estructura social, el tipo de poder de clase o la alianza de clases que rige los destinos colectivos de la sociedad y la política resultante.

Teniendo presente la multiplicidad de funciones, históricamente es posible una generalización sobre los tipos de cambio social en los que se inscribe la educación como forma de participación social. El primero corresponde a una primera etapa de industrialización con tecnologías elementales que de por sí no requiere de calificaciones de la mano de obra adjudicables por la educación institucionalizada, pero cuyo desarrollo homogeniza la sociedad por incorporación gradual a la producción y al consumo de los sectores "primitivos" con la consiguiente modificación en términos de clases sociales que se identifican en el seno del nuevo sistema, y reivindican participación en los productos materiales y culturales de la sociedad y en sus centros de poder. La integración en la sociedad nacional y la participación se efectúan a lo largo de un proceso temporal de por lo menos un siglo, paralelamente a la incorporación de la población a la economía industrial y en una situación de conflicto entre la clase superior que niega participación y las clases media y proletaria que la van conquistando.

En este tipo de cambio social —cuyo mejor ejemplo sería Inglaterra— la educación se extiende en relación a los cambios tecnológicos de la producción y a la presión de clases inferiores, con la consecuencia de que se estructura como una organización de sistemas diferenciados adjudicándose la educación a cada clase social, de acuerdo a las posiciones que el sistema de poder establece para la participación de cada una de ellas en la sociedad global y específicamente en el subsistema económico.

En el segundo tipo, lo característico es el modo como se produce la participación en relación al desarrollo económico que ha sido común en las sociedades de "trasplante" por efecto migratorio, especialmente en América Latina. Habiendo accedido la sociedad a un primer escalón

de desarrollo económico, la presión de las nuevas fuerzas sociales de tipo urbano emergentes, en una precoz vinculación de la economía nacional al mercado internacional, —la etapa del “desarrollo hacia afuera”— coincide con la voluntad de integración nacional de ciertas élites modernizantes en la realización de un modelo social avanzado para el mismo grado de desarrollo económico que conocieron las sociedades capitalistas en una etapa anterior.

Este modelo incluye la apertura de canales de movilidad social congruentes con la movilización general de la sociedad. Y se expresa fundamentalmente en el ofrecimiento de un sistema educativo que está más allá de las demandas de mano de obra de la economía y que comprende casi desde sus comienzos la oportunidad teórica de desplazamiento de los individuos de la escuela elemental a la universidad, sin limitaciones provenientes de una compartimentación de la educación para cada clase social. Estos dos tipos de cambios sociales extremos se inscriben dentro de un continuo de situaciones en relación a las cuales es necesario ubicar a Colombia.

Sin negar los cambios registrados en relación al pasado, la estratificación social sigue siendo poco fluida, con concentración de una élite de las posiciones superiores de los sub-sistemas económico, político y cultural. Si bien ha conocido modificaciones por renovación individual, como grupo ha tenido la capacidad de adaptarse a los cambios estructurales y mantener en cada etapa una dirección social determinada. Esta “élite modernizadora”, como la define Robert H. Dix, ha conciliado la defensa del sistema con un proyecto coherente de desarrollo que sintéticamente consiste en dar una prioridad absoluta al crecimiento económico con una participación social pautada y progresiva.

Desde el punto de vista económico tal proyecto implica invertir prioritariamente en la infra-estructura económica y en ciertos polos de desarrollo industrial y agropecuario, que permitan el despegue de la economía, resolviendo el casi crónico desfinanciamiento de la balanza comercial y preparando la economía para una segunda etapa de exportaciones de productos semi-elaborados o elaborados.

Si bien el estado toma a su cargo el sostén de algunos sectores productivos, lo hace sin ninguna aspiración de socialización de la economía. Lo hace sólo considerando el carácter estratégico que ellos tienen en el apuntalamiento del desarrollo empresarial privado y de la economía nacional en conjunto. La expectativa de desarrollo se cifra

entonces en la inversión extranjera, y en las condiciones de concentración de ahorro-inversión al servicio de un empresariado —de supuestas o reales virtudes similares a las enumeradas por Schumpeter— al que se le otorgan los habituales regímenes de protección, estímulo y oportunidades de beneficios.

Desde el punto de vista del mercado interno tal proyecto implica que paralelamente se fortifique un sector no-exportador “modernizado” y “capitalístico”(1), pero tal proceso requeriría la ampliación de la capacidad de consumo, lo que sólo sería posible, por la redistribución de ingresos, y esto afectaría el proyecto de concentración referido.

La tasa de crecimiento de la industria y el sector capitalístico de la agricultura —de fundamental importancia en los incrementos anuales de más del 5% del PBI— no ha sido suficiente como para reducir el sector “tradicional” o “primitivo” de producción, cuya función es la de retención —palabra preferible a ocupación, dado el carácter falso de una parte considerable de ella— de la mano de obra no incorporada por los polos de desarrollo.

La incorporación al consumo de la población comprendida en el sector “tradicional”, de “periferia interna” o de “colonialismo interno”, según la definición de distintos autores (2), no puede producirse sin un resquebrajamiento de este modelo de desarrollo.

No interesa discernir en este texto sobre si la existencia del sector económico “primitivo” es una necesidad funcional del modelo; importa sí precisar que al igual que en otras sociedades latinoamericanas el proceso de “crecimiento hacia adentro” no ha sido capaz de homogenizar la sociedad en cuanto integración a la producción y el consumo.

Bajo estas condiciones la anticipación de demandas de consumo en toda la población crearía tensiones difíciles de controlar por el sistema. En sustitución se realiza una integración gradual de clases medias y de ciertos sectores proletarios industriales en los beneficios sociales —desde la educación al consumo de bienes— relegando en una zona periférica a la mayoría marginada. Si con los actuales niveles de oferta educativa se logra el reclutamiento de la mano de obra para el sector moderno de la economía, la ampliación cuantitativa y cualitativa de la oferta no es necesaria ni conveniente para esta estrategia de desarrollo, y sus efectos sociales serían igualmente negativos porque adelantarían el proceso de demandas sociales consideradas funcionalmente negativas para aquella estrategia.

El tipo de orientación económica del proyecto se corresponde con una estructura de poder tradicional y con la peculiar experiencia que en relación al cambio conoció la sociedad colombiana y en particular la élite en las últimas tres décadas. El ciclo se inició durante la presidencia de López Pumarejo (1934 - 1938) y puede ser definido como período de la participación frustrada.

El proyecto modernizador de López —que incluía una alianza con las emergentes clases medias y proletariado industrial bajo el patrocinio de la élite— fue rechazado por el sector conservador, integrante de ambos partidos, pero la movilización social que estableció la frustración dio base para un movimiento de tipo populista como fue el gaitanismo.

Las demandas de cambio y participación social fueron resistidas con la violencia, pero ella misma provocó una especie de “guerra de fronda” entre las fracciones políticas de la élite, de la que es rescatada durante la intervención militar y substituída por un acuerdo pleno ante el riesgo de que los militares desalojaran a la élite del poder por un continuismo fundado en un populismo militar.

El original sistema de Frente Nacional creado presupone que en las decisiones relativas a política de desarrollo y modernización existe un acuerdo básico entre las fracciones de la élite representadas por los dos partidos que se arrogaron el derecho exclusivo a participar en el poder.

La institucionalización de un sistema político de participación limitada —tanto por las disposiciones constitucionales que impiden el surgimiento de nuevos partidos como por la despolitización y apatía creadas en la masa por un sistema que no guarda relación con los cambios en las clases sociales y la movilización de individuos y grupos, a consecuencia de las modificaciones estructurales— se expresa en la doble situación de bajos porcentajes electorales (3).

La legitimidad del sistema no depende de la ratificación de los electores ni está obligado a “gratificar” a la sociedad con una serie de acciones que benefician al mayor número, ya que la ciudadanía no puede sancionar a un partido o modificar una selección determinada por la Constitución y realizada por las oligarquías partidarias.

Si el sistema se ha podido mantener con tanto éxito es porque en él se reflejaba un sistema social en el que la élite tenía un control suficientemente intenso como para asignarse la responsabilidad y el derecho a la conducción y transformación del país (4).

El proyecto de transformación vigente supone que el cambio lo realizará la élite (no entramos a considerar ni las orientaciones ni la significación de ese cambio) controlando las demandas de los distintos grupos inferiores e impidiendo el surgimiento de aspiraciones "no realistas" tanto en la participación en el poder como en los medios de producción, o en el consumo; hasta una etapa posterior en que se supone que la sociedad estará "madura" como para asumir por sí misma su propio destino.

Las presiones sociales, al crear un sistema abierto y plural con participación de clases media y baja han provocado una respuesta de poder que, luego de un largo período de conflictos internos en la élite y entre ésta y las restantes fuerzas sociales, se ha consolidado en un sistema que por el momento tiene un adecuado control de los canales de movilidad y cambio social que puedan afectarlo.

El esquema presupone que el rol de liderazgo de las clases medias (común en etapas recientes de otras sociedades latinoamericanas) no tenga cabida, y sea substituído por un proceso de cooperación de grupos e individuos estratégicos, posibles de asumir un liderazgo autónomo; y que en términos generales, las clases medias actúen de acuerdo con orientaciones positivas hacia la élite, o directamente bajo su dependencia (5).

En una sociedad en que las distancias sociales entre los estratos son muy considerables, porque no sólo existe la distancia en sí misma sino que el marco estructural es la carencia de integración de las clases sociales en una sociedad nacional (6), en el que los grupos estratificados, más que conformar un continuo parecen revestir la forma de segmentos aislados unos de los otros por barreras culturales y cuyos contactos se centran en las relaciones de dependencia (7), las funciones de la educación en relación a las clases sociales pasan a ser fundamentales.

Aquel tipo anómalo de diferenciación —que implica un caso patológico de división del trabajo social utilizando la conceptualización de Durkheim (8), ya que la heterogeneidad no es consecuencia del mayor grado de diferenciación social y de la mayor comunicación entre los segmentos sociales sino de la ruptura del equilibrio funcional de la sociedad—, se expresa igualmente en la educación.

El sistema educativo vigente adjudica de hecho a cada grupo social un nivel específico de conocimientos, dificulta el logro de otros niveles más altos o distintos que los que el sistema presupone para

cada grupo, y establece implícitamente como criterio de promoción la pertenencia a ciertos grupos sociales.

Si bien aparentemente existe un único sistema escolar, éste sólo reviste una existencia formal, ya que en los tres niveles educativos las organizaciones son entre sí heterogéneas, de modo que aun en los casos en que tienen desde un punto de vista formal propósitos similares, producen escolaridades cualitativamente heterogéneas, creadoras de discontinuidades de cultura y de formación intelectual, que limitan la movilidad escolar a la posibilidad de desplazamiento vertical sólo dentro del compartimiento estanco de escolarización.

Siendo la sociedad marcadamente discontinua en la economía y en el sistema de clases, la educación refleja esas discontinuidades y ayuda a perpetuarlas. Podría plantearse que un sistema educativo universalista facilitaría o aceleraría el cambio hacia un sistema social básicamente homogéneo y funcionalmente diferenciado. Tal política es teóricamente postulable, pero sus consecuencias serían irruptivas para el proyecto vigente ya que promoverían una movilización social con las consiguientes demandas de participación en el poder y en el consumo, que volverían inviable el mantenimiento del proyecto modernizador de la élite.

La capacidad de mantener el esquema de adjudicación de educación ha sido alta en el sector rural y marginal urbano, pero no ha ocurrido lo mismo con las clases medias y las demandas de educación específicas que ellas tienen: secundaria y universitaria.

El proceso de urbanización y de desarrollo de los sectores secundario y terciario moderno ha fomentado el crecimiento de las clases medias, fundamentalmente de un sector asalariado.

Si bien en relación a otros países de América Latina las clases medias son proporcionalmente más reducidas, su crecimiento tiene la importancia de que por primera vez se les está permitiendo adquirir significación en la sociedad colombiana.

Su aparición tardía las hace coincidir con los procesos de concentración económica cuyos requerimientos de capital y tecnología moderna vuelven muy difícil la evolución del taller artesanal hacia la empresa industrial. Los caminos de movilidad social están igualmente restringidos por la vía política dada la imposibilidad de crear nuevos partidos, y el control que la élite retiene de la dirección política y de los meca-

nismos de elección de candidatos a los puestos electivos y directivos del Estado.

Los elevadores sociales posibles están muy vinculados a la educación universitaria y a la incorporación al creciente campo de la burocracia técnica. Las clases medias se manifiestan en forma cada vez más acelerada como consumidores de educación universitaria. La presión no es cuantitativamente significativa, pero es relevante porque se produce en el marco de un proceso social de rechazo de la participación en otros niveles de la acción social, y porque implica necesariamente el cambio a una movilidad competitiva y la modificación del valor del título universitario.

La posibilidad de establecimiento de un sistema de movilidad competitiva tiene alcances muy limitados como lo revelan aún actualmente las cifras de matrícula, ya que sólo comprende a ciertos sectores de las clases medias altamente orientados hacia la movilidad por el sistema educativo; pero su aceptación modificaría la posición de la élite y su método de reclutamiento.

La formación de "*generalistas*", que realiza la universidad, adquiere relevancia cuando la élite es relativamente poco diferenciada y sus integrantes desempeñan alternativa o simultáneamente roles políticos, económicos y culturales. La formación específica en un campo determinado del conocimiento humano es necesariamente menos importante—desde el momento que quienes reciben esa formación están destinados a desempeñar roles diferentes, cuyo común denominador es la posición superior en la escala jerárquica respectiva— que la socialización necesaria para asumir el liderazgo social.

Toda élite no afectada por sustitución periódica y con control de las formas en que se produce su renovación, tiene necesidad de destacar ciertas cualidades que constituyen la manifestación de su "excelencia". Esas cualidades deben ser de un tipo especial no conquistable por el simple esfuerzo o estrategia empleada por individuos o grupos, sino adjudicable por la propia élite a aquellos individuos que por herencia o movilidad reconocen como integrantes legítimos del grupo, controlable y apreciable por ella misma. La posibilidad de tal control está relacionada con la unidad de la élite en cuanto a la forma de establecer un tipo de "excelencia", en cuanto al reclutamiento sin interferencias derivadas de los conflictos de las distintas sub-élites, y de la misma inexistencia de contra-élites; mecanismo que se complementa por el

logro de la lealtad de los individuos al sistema social, aun de las capas desfavorecidas, mediante la distinción entre elegidos y no elegidos, convenciendo a estos últimos de la superioridad de la élite.

De ahí la socialización de los futuros miembros desde edades tempranas, y la existencia de ciertas credenciales cuya obtención es difícil por la ausencia de oferta de vías institucionales para lograrlas, y por el lento proceso de preparación para acceder a las mismas.

Cada sociedad elige ciertas credenciales. En el caso colombiano, luego de las que tienen relación con el origen familiar —factor aún significativo— se han jerarquizado las de tipo cultural.

La importancia concedida a la pureza idiomática y la transformación en motivo de orgullo de la conservación del idioma —en un país con las tasas de analfabetismo y de escolarización incompletas como indicadas— jugaron un papel importante, que luego fue progresivamente sustituido por la posesión de títulos universitarios.

El título universitario constituía —hasta la expansión de la matrícula— el símbolo exterior que poseía un grupo social superior para legitimarlo en su derecho a la dirección social, creyéndose el grupo con mejor formación para acceder al poder. La Universidad Nacional que lo expedía era a su vez el centro de socialización de esa élite, de interacciones necesarias para la identificación y solidaridad de los individuos que la componían en el futuro desempeño de clase política —en el sentido de la expresión que utiliza Gaetano Mosca (9)—. Como institución, sus ceremonias de graduación respondían a un rito que significaba la promoción a un nuevo estado social. Así, la Universidad Nacional confería unidad a una élite parcialmente escindida por la identidad regional, por la identidad partidaria (los partidos políticos obtuvieron una identificación de vastas categorías sociales con anterioridad a una identificación en términos de nación) por las ideologías y confesiones religiosas.

El sistema presuponía un cierto grado de movilidad ya que no todos los universitarios podían ser definidos como “herederos” (10), pero el tipo de reclutamiento de miembros externos a la élite estaba caracterizado por la movilidad patrocinada o promovida (11). Los individuos móviles eran elegidos por la élite o sus agentes en los grupos sociales más cercanos a su posición, que tuvieran condiciones personales y de orientación adecuadas para integrar aquélla. El proceso de selección establecido desde el comienzo por el sistema educativo se hallaba en unas

pocas instituciones especializadas entre cuyas funciones la transmisión de los valores de la élite y la creación de lealtad hacia el grupo eran fundamentales.

La incorporación de las clases medias a la universidad en la inmediata post-guerra con voluntad de utilizar las instituciones para realizar sus proyectos de movilidad social, competitiva e individualista, no sólo modificó tal sistema, sino que originó el fenómeno de la proliferación de universidades como modalidad de control de reclutamiento de élites, al mismo tiempo que como forma de satisfacer las mencionadas demandas de las clases medias. Tal situación no proviene de un proyecto de extensión de la educación superior ni está motivada en una racionalización de los recursos disponibles, sino que constituye un producto de los esfuerzos encontrados de los distintos grupos sociales, en que unos intentan acceder a la educación y otros se esfuerzan por limitar a aquéllos el acceso.

La resultante es un sistema universitario estratificado por la diferenciación de las instituciones según el origen social de su población estudiantil y según las diversas calidades académicas de las instituciones participantes en el sistema (véanse los cuadros demostrativos al fin del capítulo).

En 1948 se crea la Universidad de los Andes y a partir de esa fecha, aproximadamente, se produce el desplazamiento de la élite hacia ciertas universidades privadas y, en algunos casos, hacia determinadas facultades que sumaban al prestigio social general de la institución, el prestigio académico. Ciertas universidades que disponían de un alumnado orientado hacia ellas por razones religiosas, cambian de hecho su definición al pasar a atender grupos sociales que se matriculan en ellas, ya no por las mismas razones sino por las condiciones de prestigio y porque tienen a su cargo la socialización exclusiva de ciertos grupos.

Los cuadros de comparación de indicadores de estratificación de las poblaciones estudiantiles de las universidades privadas de alto prestigio en relación a la Universidad Nacional muestran claramente la estratificación social existente en fechas recientes, luego de haberse cumplido el proceso de diferenciación funcional en relación a las clases sociales de las respectivas instituciones.

Las distancias nunca son extremas porque en último término la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional provienen de sectores medios y porque la escasez de oferta privada en algunas carre-

ras, como medicina, mantuvo una población de origen social alto en la principal universidad oficial.

El desplazamiento de la élite hacia las universidades privadas provocó automáticamente el descenso de prestigio del título de la Universidad Nacional y la desvalorización relativa de la condición de profesional universitario. Los títulos tienen "valores sociales" distintos, según las universidades que los emiten.

Esta socialización compartimentada ratifica la solidaridad de grupo elitario y consolida relaciones particularistas de suma importancia para el ingreso directo a posiciones elevadas en las empresas privadas o en los grandes cargos del Estado.

Las clases medias de la Universidad Nacional se encuentran en la situación de que no sólo el título profesional como tal no tiene un valor universal, sino que las posibilidades de competir de acuerdo con calidades académicas están comprometidas por la demanda de educación universitaria de otras capas de las clases medias que recientemente adquirieron ese status, y que carecen de la formación intelectual pre-universitaria adecuada para ingresar a la Universidad Nacional, o que necesitan para poder estudiar la oferta de cursos vespertinos o nocturnos compatibles con el desempeño de roles ocupacionales.

Entre las opciones de asumir la posición de universidad central y encarar las respuestas académicas a la demanda de plazas, y renunciar a esa posición para asumir con una política limitacionista el carácter de universidad de alto nivel académico, la elección fue unánime en este último sentido.

El temor al descenso de prestigio se constituyó en un elemento subyacente de las racionalizaciones. En competencia por el mismo mercado profesional con las universidades privadas de prestigio y con ciertas universidades del tipo "énclave", las políticas preconizadas por autoridades y por miembros de la Universidad Nacional han consistido en limitar en lo posible el ingreso, para utilizar los recursos disponibles en el logro de una alta capacitación técnica que permitiera a los egresados competir con los de las universidades mencionadas, tratando de compensar carencia de posición social con conocimientos académicos. El temor al descenso social característico de las clases medias, se proyectó a la universidad identificada con las clases medias más antiguas, deseosas de competir en el reclutamiento de las posiciones más elevadas del sistema social.

La demanda de nuevos sectores emergentes de clase media fue relativamente controlada con un crecimiento de los cupos siempre por debajo de la demanda y con varias medidas académicas, como se analizó en el capítulo respectivo.

Si el sistema educativo pre-universitario está compuesto de unidades heterogéneas que preparan en distintos y estratificados niveles de educación formal a sus respectivos estudiantes, la existencia de una prueba objetiva como pre-requisito de ingreso a la universidad constituye una barrera difícilmente franqueable para quienes han recibido el tipo de formación más deficiente.

En algunos casos los futuros integrantes de universidades privadas de bajo nivel intentan el ingreso en la universidad oficial, en otros tienen un conocimiento explícito de que sus probabilidades de ingresar son muy bajas, y directamente presentan exámenes en aquel tipo de instituciones donde no sólo el nivel de exigencias inicial es más bajo sino que los requisitos de pasaje de cursos son igualmente inferiores.

Esas universidades se han desarrollado en Bogotá para atender fundamentalmente el crecimiento de las clases medias inconvenientemente educadas o carentes de oferta compatible con la condición de empleados de muchos de sus integrantes, y tienen tasas de crecimiento demográfico muy considerables a pesar de que en algunos casos sus estudios y títulos carecen de reconocimiento oficial.

El segundo tipo de demanda de ingreso proviene de las clases medias provinciales con problemas de formación pre-universitaria similares y con los problemas económicos del desplazamiento a las grandes ciudades universitarias del país. Al igual que en el caso anterior la demanda de cupos es creadora de universidades que se concretan con una relativa facilidad, debido a que la capacidad de presión de las clases medias es más alta sobre las autoridades departamentales que sobre los poderes políticos centrales, incluyendo entre éstos a las autoridades universitarias. Las universidades de pequeñas ciudades de provincia tienen un nivel académico tan bajo como las universidades privadas de bajo status de Bogotá y muchas de ellas no merecen el apelativo de universidad.

Los egresados de estas últimas dos categorías de universidades en principio no compiten en el mismo mercado profesional de los egresados de universidades privadas u oficiales de prestigio. Sus posibilidades se concretan: en el ámbito provincial, en roles no profesionales de burocracia, en tareas de técnicos intermedios bajo la dirección de otros

profesionales, o asumiendo las responsabilidades de un profesional de empresas pequeñas pero con remuneraciones y consideraciones inferiores a las habitualmente adjudicadas a un profesional egresado de las "grandes" universidades.

Si este es el fenómeno general, ello no excluye la movilidad ascendente de un sector de este tipo de profesionales, reconocidos por sus cualidades individuales en las empresas u organizaciones en las que trabajan, o por la incorporación mediante los canales políticos provinciales a ciertas esferas de poder. En cualquiera de los casos el punto de partida de esa movilidad es inferior al que logran en el mismo momento del egreso los profesionales de los otros tipos de universidades, de tal forma que la movilidad es en dos tiempos: uno, el proceso educativo que los pone en contacto, en situación de dependencia, con titulares de poder, y el segundo el ascenso bajo el patrocinio de estos titulares.

Sin duda no existe una fórmula única y de efectos no controvertidos en la creación y extensión de un sistema universitario, pero de lo que no puede haber duda es que sea cual sea la base teórica a partir de la cual se establezca un juicio sobre el sistema universitario colombiano, difícilmente se podrá concluir afirmando la conveniencia del mismo en relación a criterios de racionalidad y de formación de recursos humanos de alto nivel.

Si el actual sistema ha surgido y pervive aunque existen tantas condiciones teóricas desfavorables, es por la importancia de las funciones que cumple en relación a otros valores distintos de los académicos y por la funcionalidad del mismo como mecanismo de control de la movilidad social.

El hecho de que un gran número de universidades compiten ofreciendo profesionales en un mercado reducido, lejos de manifestar una competencia activadora de la demanda de profesionales de calidad y orientación adecuadas y de obligar a las unidades formadoras a satisfacer cualitativa y cuantitativamente esas demandas, es la expresión institucional de la anulación de un mercado único.

El mercado global es sustituido por una serie de mercados relativamente aislados, en los que compiten las universidades del mismo nivel y dentro de los cuales las variables de calidad de la preparación y orientación profesionales tienen cierto peso.

La compartimentación del proceso de socialización universitaria, en vista a proveer mercados diferenciados, cumple funciones importantes

en relación al control de la movilidad social y del reclutamiento de la élite. El conjunto del sistema educativo y en particular el universitario es funcional a un tipo de movilidad promovida con adjudicaciones de niveles a los cuales los distintos grupos sociales, según su punto de partida, tienen posibilidades realísticas de acceder.

Paralelamente al reclutamiento de élites se destaca como la otra gran función de la universidad colombiana la preparación de los recursos humanos, técnicos y científicos necesarios para el proceso de desarrollo de la economía nacional. La prioridad y simultaneidad de funciones, en principio tan opuestas, señala una situación que puede ser definida como "universidad en transición" entre la etapa de universidad de élite y universidad de masas.

La función de formación de los recursos humanos requiere una universidad moderna y racionalizada, organizando de acuerdo a un plan a todas las unidades de educación superior del sistema. Ello se opone a la existencia de 38 universidades, a los particulares regímenes de funcionamiento, a los objetivos propios de cada institución y a las funciones que cumplen en relación al reclutamiento elitario. La ambivalencia de funciones ha impedido la extensión de la universidad de masas y condicionado en múltiples aspectos el alcance de la modernización.

El resultado es que en el mismo sistema coexisten los más variados tipos de universidades según el entre-cruzamiento de las variables: tradicional-moderno, elitismo-formación de masas, existencia de un proyecto de modernización-crecimiento condicionado por la demanda.

Dentro de ese conjunto se destacan algunas universidades —las más importantes del país— que asumieron el proyecto de universidad moderna en lo relativo a distribución de la matrícula estudiantil. Su peso en el total nacional ha conferido a la universidad colombiana un perfil moderno con enorme importancia de las carreras técnicas para los sectores primario y secundario, con el correlativo descenso de la parte tradicional del derecho, las humanidades y la medicina.

La transformación —que la hace equiparable con la distribución de estudiantes en universidades de algunos países socialistas— no ha sido el resultado de un cambio de valores en la sociedad colombiana expresables en una orientación hacia los propios de la sociedad industrial, sino de las decisiones de ciertas élites universitarias modernizantes que han aprovechado del control que les confería una demanda de plazas universitarias muy por encima de la oferta.

Es destacable que como no existe una organización universitaria nacional tampoco se puede registrar una competencia homogénea por las plazas disponibles. Las principales universidades oficiales y privadas del país, y en particular la Universidad Nacional, tienen una oferta de cupos por debajo de una demanda interesada en obtener educación de calidad. La demanda no consiste en un mero reclamo de lugar sino que de acuerdo a la escala de prestigio de las clases alta y medias se interesa por las carreras largas y entre ellas por algunas de mayor valoración social.

El proyecto universitario modernizador, al tener la libertad de establecer no sólo los cupos por carreras, sino también la asignación de recursos, confirió a aquellas especialidades elegidas un prestigio intelectual que se transformó en social. Esta función reconocida a la universidad de establecer la escala de prestigio tiene antigüedad en el país y está vinculada a la conformación elitaria de la sociedad colombiana anteriormente anotada. A esta situación se agregó una oferta total de profesionales muy limitada, por lo que a pesar de su carácter predominante técnico no se producían estrangulamientos en un mercado considerablemente incrementado por la ampliación de la esfera de la acción del Estado y la tecnificación de sus servicios.

La posibilidad de fijar las pautas de prestigio de las profesiones —por la acumulación de selección previa, mejor nivel intelectual e incorporación de los egresados a las mejores posiciones sociales— se acompaña de la “degradación” de las profesiones que las universidades prestigiosas rechazan y que son desarrolladas preferentemente por las universidades de menor prestigio.

La modernización de la distribución de la matrícula se ha realizado a partir de una política limitacionista, tanto para seleccionar intelectualmente como para contar con recursos con los cuales implementar la modernización académica. El reverso de esa política ha sido la extensión de un sector universitario preferentemente tradicional que crece gracias al limitacionismo del sector universitario modernizado. Al igual que en la economía, donde el sector moderno ha promovido la extensión del sector tradicional en producción y consumo, que sólo tangencialmente recibe beneficios del primero; en materia universitaria el proyecto modernizador, por su carácter limitacionista, ha engendrado la extensión de un sector tradicional con algunos aspectos aparentemente modernos como necesidad complementaria de su propia existencia.

Las élites universitarias modernizantes no sólo han modificado la distribución de la matrícula y el egreso a favor de la formación técnica, sino que en virtud de una situación de vacío de poder han realizado reformas sustanciales en la estructura universitaria y en los aspectos institucionales del rol de profesor.

El crecimiento de la población universitaria impidió el mantenimiento de una tradición universitaria propia, e hizo que no existieran mayores obstáculos a la innovación o a la limitación de los modelos de universidades desarrolladas. El mismo crecimiento impuso fórmulas de complementación de estudios en el exterior para perfeccionar los docentes velozmente reclutados, y la socialización académica en muchos casos, lejos de provenir de una reflexión consciente de los problemas nacionales se produjo en el cuadro de universidades extranjeras. La referencia hacia el exterior por una parte ha sido positiva en cuanto a concientización sobre el camino por recorrer para lograr altos niveles académicos, pero por otra, al ubicar a la propia universidad en un continuo entre polos de desarrollo y de atraso académicos, transformó a la universidad en muy dependiente de los modelos que se le ofrecieran desde el exterior.

En este cuadro se inscribe el tipo de poder universitario. Las universidades oficiales y con mayor razón las privadas se caracterizan por la débil o casi nula participación del cuerpo docente en las resoluciones académicas. Las universidades son regidas por consejos superiores en los que predominan miembros que teóricamente son delegados de instituciones gubernamentales o privadas y que en los hechos no tienen mandantes que les asignen las grandes orientaciones de política. Dichos miembros no sólo son externos por delegación sino también por ser ajenos a las actividades académicas cotidianas. Los miembros internos o centrales de los gobiernos universitarios son en la mayoría de los casos minoritarios y pocas veces expresan o representan claustros académicos o senados profesoraes.

La falta de intervención social, la ausencia de políticas académicas de los órganos de gobierno nacional y la atonía de la vida académica interna, han creado condiciones de vacío de poder, lo que a su vez ha conferido un amplio campo de decisión a élites modernizantes con respaldo externo, ya sea gubernamental, empresarial o de organizaciones internacionales, según el peso de cada una de estas fuerzas en el tipo de institución. Rectores y decanos reclutados en aquel sector con el apoyo de

oficinas de planeamiento realizaron bajo estas condiciones transformaciones que en otras universidades lleva décadas el lograrlo. Ellas han consistido fundamentalmente en: el desarrollo del sector técnico ya anotado, en procesos de integración intra e inter facultades, en creación de unidades académicas fundadas en la ciencia y no en la técnica profesional, y en la modificación del rol profesoral en vistas a una profesionalización del mismo en sustitución de los antiguos sistemas de profesor-cátedra.

Las mismas causas que explican la facilidad de la modernización académica establecen la limitación en sus alcances. La transformación en la mayoría de las universidades oficiales de los cargos docentes en de "tiempo completo" o de "dedicación exclusiva" al realizarse en un período muy breve implicó el reclutamiento indiscriminado para tal tipo de cargos. No se crearon éstos para un nuevo tipo de personal docente, sino que se supuso que la nueva definición del cargo transformaría a la universidad. Se responsabilizó a la dedicación parcial de la ausencia de un nivel académico elevado y de la falta de investigación y se consideró que el cambio institucional del rol de profesor aparejaría la solución del problema.

El cambio aportó mejoras pero no pudo establecer la solución integral del problema ya que él dependía de la abundancia de los recursos intelectuales disponibles de reclutamiento, de la diferenciación cultural de la sociedad y de la orientación hacia el desempeño del rol docente profesional de las personas que los iban a ocupar.

En otras sociedades este cambio se origina en los sectores modernos docentes que por ser tales imponen la creación de estructuras y formas que permitan la realización del rol pautado previamente por valores internalizados. Tal cambio depende en la velocidad de su realización del incremento del sector portador de los nuevos valores y de su imposición al resto de la universidad.

En Colombia la modernización estructural al ser el resultado de decisiones jerárquicas, sólo puede rendir sus frutos en la medida en que se produzca la renovación de los titulares en los nuevos roles, y en esta etapa intermedia, muchos de los desempeños sólo pueden tener un carácter formal. El otro factor es que al realizarse los cambios sin un proceso previo de participación docente en los mismos, ellos los obligan sin comprometerlos.

Es muy difícil imaginar el funcionamiento de departamentos o institutos que suponen la congregación de especialistas de una misma disciplina, con programas de trabajo en equipo y proyectos de investigación, si el nucleamiento es el mero resultado de una decisión administrativa.

La ambigüedad es el signo de este tipo de universidad en transición. Ambigüedad por la prioridad simultánea conferida al reclutamiento de élites de acuerdo a un patrón de movilidad promovida o patrocinada, y a la formación de los recursos humanos para el desarrollo de la economía colombiana. Ambigüedad porque el desarrollo de un sector moderno incrementa un sector tradicional de universidades; ambigüedad porque la modernización estructural interna, dado su carácter jerárquico, se acompaña de un formalismo en la realización, y ambigüedad por la presencia de un proyecto modernizador en una sociedad no desarrollada.

Las relaciones entre sociedad y universidad son equiparables a las de una relación de interdependencia asimétrica de variables con una situación de autonomía universitaria —en el sentido sociológico y no legal del término— dentro de un marco de posibilidades limitadas. Esa autonomía permite —como ha sido señalado en el capítulo IX— que la universidad o bien se encuentre en un grado de diferenciación avanzada en relación al estado de la sociedad, o se encuentre retrasada en relación a los cambios sociales, o finalmente que exista un ajuste tanto en la condición de sociedad no desarrollada como en la sociedad desarrollada.

El proyecto de modernización vigente en la universidad colombiana la ubica en una posición avanzada en relación al grado de desarrollo de la sociedad. Tal situación ha ejercido efectos positivos en el cambio de esta última, pero ella misma muestra las limitaciones que finalmente la sociedad impone a la universidad, obligándola a formas de ajuste que ratifican el carácter dependiente de la institución y establecen los parámetros dentro de los cuales puede llevarse a cabo su proyecto innovador.

Entre los diversos indicadores de la relación nos limitamos a evocar los relativos a la diferenciación cultural y al mercado de empleo.

El bajo grado de diferenciación social tiene su expresión correlativa en la diferenciación cultural. Las limitaciones cuantitativas y cualitativas del sistema educativo se expresan en la constitución de un uni-

verso cultural limitado, y poco diferenciado, que no ofrece ni bases suficientemente selectivas para el reclutamiento de estudiantes y profesores, ni centros externos de crítica a la producción universitaria, generadores de una situación dialéctica de renovación del conocimiento, y no existiendo posibilidades para tal situación, se dificulta la creación de una comunidad intelectual en la cual apoyar el proceso interno de modernización universitaria.

Esta limitación teóricamente es compensable por una política universitaria actuando sobre la enseñanza previa y sobre el medio cultural por medio de la producción intelectual dirigida a desarrollarlo.

Problema insoluble es el del mercado de empleo. La universidad puede adelantarse a las necesidades en materia de recursos humanos de la sociedad respectiva y formarlos cuantitativa y cualitativamente de acuerdo con un proyecto racional de desarrollo, pero si éste no se produce o se efectúa a un ritmo menor al previsto por el proyecto universitario, necesariamente se plantea un desajuste entre universidad y mercado de empleo.

Dada la extracción social de los egresados universitarios las posibilidades de incorporarse al mercado de empleo son siempre elevadas, especialmente en la órbita estatal, pero a mayor saturación, se produce sub-utilización o utilización inadecuada de los profesionales, cuya productividad pasa a ser decreciente paralelamente a la hipertrofia de los servicios administrativos.

En el sector privado ante una abundancia de oferta se tiende a ocupar puestos de menor jerarquía y de inferiores requerimientos en conocimientos o competencias específicas con personas que tienen los niveles formales más elevados de la sociedad.

Esto repercute sobre la educación en diversas formas. Si el desempeño previsible no es complejo, los estímulos para el aprendizaje en las universidades serán menores y la aceptación de instituciones de bajo nivel académico más extendida. Paralelamente para reclutar los escasos puestos de desempeño técnico se extiende la exigencia de estudios formales postgrado y socialmente se afianza el mecanismo de movilidad social patrocinada ya anotado.

Las fórmulas de ajuste implican menor rendimiento de la inversión educativa por bajo rendimiento cualitativo para la masa de graduados y extensión del período de estudios para los destinados a los puestos superiores.

La incorporación de egresados de las áreas técnicas en el mercado de empleo de por sí, no parece ser un agente de cambio muy fundamental. Si los roles ocupacionales son inadecuados a la formación, muy frecuentemente se produce un desempeño ritualista de los mismos, con el resultado de un bajo impulso hacia el cambio del sistema.

Un problema especial y de sumo interés para futuras investigaciones es el desempeño de los roles de generalistas por egresados del área técnica. No está comprobado que este tipo de formación implique una actitud racionalizadora como forma de abordar los problemas de funcionamiento social. Las actitudes y opiniones no reflejan necesariamente la precisión científica del conocimiento en el área específica profesional. En cierta forma se puede decir que las expectativas de las teorías del desarrollo fundadas en valores culturales han demostrado ser no muy diferentes de la ingenua fórmula de A. Comte sobre los beneficios del gobierno de los científicos. El conocimiento científico o técnico en una determinada área no es ninguna garantía de mayor clarividencia en cuanto a objetivos de cambio, ya que éstos no surgen de una formulación matemática sino de una elección de acuerdo a valores.

La modernización universitaria avanzada en relación al desarrollo nacional promovió la solución emigratoria como otra de las fórmulas del ajuste. Uno de los efectos del proyecto universitario ha sido transformar a Colombia, comparada a las restantes grandes naciones de América Latina, en el país de más alta emigración en relación al volumen de profesionales formados por su sistema universitario. La pérdida por emigración afecta las áreas técnicas y médicas privilegiadas por el proyecto universitario y los diversos indicadores considerados permiten establecer que cualitativamente el país pierde buena parte de sus mejores técnicos a consecuencia de la emigración.

El conjunto del análisis demuestra la limitación intrínseca del proyecto modernizador universitario. Este puede colaborar eficazmente acelerando un proceso de cambio, pero no puede promover el cambio de la sociedad. Las alternativas están en la sociedad y en especial en un sistema político y no en la universidad. La interdependencia asimétrica entre ambas variables limita y distorsiona el proyecto universitario.

Lo anterior no implica renunciar al papel activo de la universidad ni acogerse a las nuevas formas del elitismo, que partiendo de la limitación del mercado de empleo concluyen en que la única alternativa

consiste en reducir el volumen de estudiantes y por ende de egresados, fusionando de esta forma conceptos clasistas con ideas tecnocráticas.

Implica sí afirmar que más allá del proyecto modernizador, existe una etapa post-moderna que no debe caracterizarse por la imitación o el ajuste a los modelos de los países desarrollados, sino por la elaboración de un programa concebido para la universidad de los países no desarrollados.

Tal proyecto debe promover a los niveles más altos a la docencia y a la investigación, de forma tal que la universidad constituya un cuerpo de conocimientos sobre la sociedad nacional, y de acuerdo a ellos, forme a sus estudiantes en el nivel científico ajustado a la etapa de desarrollo en que se encuentra el país. Implicaría re-pensar las clásicas divisiones de carreras intermedias, largas y de post-grado como compartimentos separados, adjudicados a carreras de acuerdo a pautas de sociedades desarrolladas, e introducir un sistema de enseñanza continua, con "salidas" al mercado de empleo a distintos niveles de estudio y "reingresos" al sistema educativo en vista a la ampliación y perfeccionamiento de los conocimientos. Requeriría asumir como propósito prioritario la socialización de los estudiantes en relación a la cultura nacional y a la naturaleza específica de los problemas de su país, de forma tal que se obtenga del futuro profesional o científico, un compromiso con la transformación de su sociedad.

Esta sería una etapa de cambios profundos en la propia universidad, la más difícil, pero tal vez la única forma en que la educación superior puede promover el cambio social.

(Tomado del libro del mismo título próximo a aparecer).

NOTAS:

- (1) Aníbal Pinto: *Diagnósticos, estructuras y esquemas de desarrollo en América Latina*. Santiago, noviembre de 1969. Mimeografiado.
- (2) Pablo González Casanova: *Sociología de la explotación*. Siglo XXI, editores. México, 1969. Rodolfo Stavenhagen: *Las clases sociales en las sociedades agrarias*. Siglo XXI, editores. México, 1969. Fernando Cardoso y Enzo Faletto: *op. cit.* Celso Furtado: *Teoría y política del desarrollo económico*. 2ª ed. Siglo XXI, editores. México, 1969. Jorge Graciarena: *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina*. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1967.
- (3) Santiago Araoz: *La abstención electoral y la participación política*. Centro de Investigaciones para el Desarrollo. U. Nacional. Bogotá, 1969. Anita Weiss: *Tendencias de la participación*

electoral en Colombia. 1935 - 1966. Departamento de Sociología. Universidad Nacional. Bogotá, 1968.

- (4) Este libro fue escrito con anterioridad a las elecciones del 19 de abril de 1970. Los resultados de éstas confirman el análisis realizado, ya que por encima de cualquier juicio en términos de partidos, la votación indica un doble rechazo: el del proyecto de desarrollo de la élite y de los dispositivos políticos del Frente Nacional que impiden la participación colectiva en las decisiones políticas. La suma de los votos obtenidos por los grupos políticos discrepantes lo prueban.
- (5) Robert H. Dix: Colombia. *The Political Dimensions of Change.* Yale University Press, 1967, pág. 389, resume su análisis sobre la naturaleza de la situación social en los siguientes términos: "En contraste con la mayoría de los otros países latinoamericanos en el mismo periodo —Colombia ha adherido ampliamente a la ruta política del desarrollo que hemos denominado la de la élite modernizadora, funcionando con las formas de un gobierno republicano. Aunque esto no significa que haya permanecido totalmente cerrada a los nuevos reclutas o a las nuevas ideas, la clase alta colombiana ha retenido en sus manos la mayor parte de los recursos de la sociedad, incluyendo dominio económico, acceso altamente desproporcionado a la educación, control de las 'mass-media' y de los partidos políticos mayoritarios".
- (6) Definida en los términos en que lo hace K. Silvert: *Narcisismo y Política de Desarrollo.* Ed. Paidós. Buenos Aires, 1965, pág. 40. "El nacionalismo es la aceptación del estado como árbitro impersonal y último de los asuntos humanos (...). El enunciado describe una función, la conciliación de disputas".
- (7) Economía y Humanidades. *Estudio sobre las condiciones del desarrollo de Colombia.* Bogotá, septiembre de 1958, pág. 109, se expresa con exageración y cierta imprecisión conceptual: "La sociedad colombiana, vista como un todo, aparece más todavía como una 'sociedad de castas' que como una 'sociedad de clases'. Existe un abismo entre las capas sociales dirigentes y las capas populares de la población. Las capas sociales populares aún no han adquirido el carácter de 'clase' lo que exige una toma de conciencia (...)".
- (8) Véase Emile Durkheim: *De la division du travail social.* 7ª edición. P.U.F. París, 1960, Libro II, capítulo II y libro III.
- (9) Gaetano Mosca: *Elementi di Scienze Politica.* Gius, Laterza & Figli. Bari, 1953. En especial el capítulo II, *La classe politica.*
- (10) Pierre Bourdieu et J. C. Passeron: *Les bérétiers.* Les Editions de Minuit. París, 1964. Pierre Bourdieu: *La transmission de l'héritage culturel.* En Dartras: *La partage des bénéfices.* Les Editions de Minuit. París, 1966.
- (11) El concepto de movilidad patrocinada o promovida (sponsored) ha sido desarrollado con connotaciones especiales por Ralph H. Turner: *Modes of Social Ascent through Education: Sponsored and Contest Mobility.* En Halsey, Floud and Anderson: *Education, Economy and Society.* The Free Press, 1961.